



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR
ILMA. SRA. ALCALDESA**

Asunto: Limpieza de solares / Peligro de incendio

Ilma. Sra.:

Se ha recibido en esta Institución una queja relativa a la persistente inactividad del Ayuntamiento de XXX en materia de limpieza y desbroce de las parcelas colindantes al XXX.

La situación descrita que ha dado lugar a la apertura del expediente que se tramita en esta Institución con el número **1625/2025**, referencia a la que rogamos haga mención en posteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Según manifestaciones del autor de la reclamación, varias parcelas situadas alrededor de dicho barrio *“presentan desde hace tiempo abandono, vegetación proliferante, residuos y riesgos de incendio, lo que afecta a la salubridad y seguridad de la localidad. Este deterioro parece concentrarse principalmente en el Barrio XXX, mientras que el resto del municipio se mantiene limpio gracias a la labor de los operarios municipales”*.

A pesar de las solicitudes y comunicaciones realizadas con la Alcaldía, las actuaciones de desbroce y limpieza no se realizan, facilitando la persistencia de riesgos, principalmente de incendio, con graves consecuencias para la seguridad del resto de personas y bienes

Según se indica, en numerosas ocasiones el Ayuntamiento ha alegado carecer de competencias para actuar en estas parcelas o para imponer obligaciones a los titulares, e incluso manifiesta que no conoce a sus propietarios, lo que viene impidiendo una intervención eficaz para la conservación y protección del entorno urbano, y menciona el autor de la queja que los vecinos han tenido que recurrir a medios propios para desbrozar el entorno con el objeto de reducir el potencial combustible y mejorar su propia seguridad

La documentación gráfica facilitada por el autor de la queja, la aludida intervención vecinal de limpieza y desbroce de algunas parcelas, así como la situación de riesgo debido a las altas temperaturas y el incremento de episodios de incendios forestales



y urbanos-forestales que venimos sufriendo obligan a las administraciones públicas a adoptar medidas urgentes de prevención y protección, evitando dilaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.





En este marco, la existencia de solares en estado de abandono con acumulación de vegetación genera un riesgo objetivo e severo de incendio. Dicho riesgo requiere una actuación ágil y eficaz que no puede quedar supeditada a nuestra tramitación ordinaria con solicitud de información, ya que podría suponer una demora con consecuencias indeseadas. Por ello, la intervención del Procurador del Común mediante Resolución directa a ese Ayuntamiento resulta plenamente justificada, en aplicación de los principios de precaución y prevención, ampliamente reconocidos en la normativa ambiental y de seguridad ciudadana, así como del principio de eficacia administrativa previsto en el artículo 103 de la Constitución Española.

Cabe pues, dando por cierta la información facilitada por la persona interesada, basada además en la información allegada, hacer a ese Ayuntamiento un recordatorio de sus deberes legales en materia urbanística.

En primer lugar, debemos comenzar poniendo de manifiesto que, con carácter general, los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles tienen el deber urbanístico de conservar los mismos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad, ejecutando los trabajos y obras necesarias para mantener en todo momento dichas condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado, en virtud del artículo 8.1b) 1º de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y del artículo 19.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo (RUCYL).

Por lo tanto, en un principio, ese Ayuntamiento no sería responsable del deficiente estado de conservación de los solares objeto de queja, ni del incumplimiento de la obligación que atañe a su propietario de mantener el mismo en las condiciones citadas. Todo ello porque, como mantiene la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de junio de 2011, dicho deber *“atañe a los propietarios y no exige requerimiento previo del Ayuntamiento, sino que su exigencia viene impuesta directa y personalmente a los propietarios de bienes inmuebles, sin tener que esperar a que el Ayuntamiento recuerde tal deber, y sin tener que esperar a que el propietario del inmueble colindante denuncie o se queje por los perjuicios que resultan de dicha falta de conservación”*, como parece haber ocurrido en el presente supuesto.

No obstante lo anterior, la legislación urbanística atribuye a los Ayuntamientos la competencia de vigilar el cumplimiento de este deber legal de conservación que los propietarios tienen respecto de los terrenos y construcciones cuya titularidad ostenten.

Esto es, ante una eventual inobservancia de este deber por parte de los propietarios, en ejercicio de la competencia municipal en materia de urbanismo, cuya protección se configura como una de las competencias “propias” de las Entidades locales, en virtud del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración municipal dispone de un instrumento jurídico formal, la orden de



ejecución, regulada en los artículos 106 de la LUCyL y 319 y siguientes del RUCyL, para exigir la realización de las obras necesarias que garanticen el cumplimiento del deber de conservación antes referido; deber que tiene su fundamento en el interés público, en la seguridad de las personas y cosas, así como en garantizar la salubridad e higiene de los terrenos e inmuebles, alcanzado a toda su extensión, no solo a las partes del mismo colindantes a la vía pública. Esta orden de ejecución debe detallar con la mayor precisión posible las obras y demás actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones citadas y subsanar las deficiencias advertidas, así como su presupuesto estimado y el plazo para cumplirlas, en atención a su entidad y complejidad.

Asimismo, debemos recordarle que el incumplimiento de la orden de ejecución dictada, incluso habilita a la Administración pública a adoptar determinadas medidas, con fundamento en el interés público, en la seguridad de las personas y cosas, y en la salubridad e higiene de los terrenos e inmuebles.

En este sentido, el artículo 106.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, dispone lo siguiente: *“El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, en ambos casos hasta el límite citado en el artículo anterior”*.

En definitiva, resulta evidente que mantener las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, limpieza y ornato de fincas y solares, constituye una responsabilidad de todos los ciudadanos, en cuantos propietarios de los mismos, pero se debe fomentar y exigir el cumplimiento del deber de conservación desde instancias municipales, atajando los incumplimientos con las medidas que resulten más adecuadas a la finalidad que se persigue, incluso con la urgencia requerida, como en el caso que nos ocupa, además de ejercitar, si fuera preciso, la potestad sancionadora.

Por ello, debemos insistirle en la necesidad de actuar para evitar que se mantenga un estado de deterioro y abandono de las fincas de ese municipio, pues además de afectar a la higiene y el ornato público puede poner en peligro la seguridad y salud de los vecinos, así como causar daños a los inmuebles colindantes y generar riesgo de posibles incendios, por lo que debe valorar incluir en la programación ordinaria de los servicios técnicos municipales la vigilancia, inspección y prevención, de forma especialmente intensas en periodo estival.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, consideramos oportuno formular la siguiente **Resolución**:

PRIMERA: Que esa Corporación municipal que V.I. preside ha de velar por el cumplimiento del deber urbanístico de los propietarios de terrenos y demás bienes



inmuebles de conservar los mismos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad, extremando las medidas de vigilancia e inspección.

SEGUNDA: Cuando se trate de actuaciones de conservación que hayan de ser reiteradas año tras año como, por ejemplo, las de desbroce y limpieza de maleza, ha de tenerse en cuenta esa circunstancia para que ese Ayuntamiento actúe periódicamente en el ejercicio de las competencias antedichas, ejercitando la orden de ejecución e, incluso, la ejecución subsidiaria a costa del propietario del bien si fuera necesario, a fin de que las fincas se mantengan en adecuado estado de conservación, teniendo muy presente en todo momento la situación de peligro para las personas y los bienes que ello puede conllevar.

TERCERA: Que lo anterior sea tenido en cuenta de forma particular en relación con los espacios a que se refiere la queja que ha dado lugar al expediente ahora resuelto, ordenado de forma inmediata la limpieza y desbroce de las fincas en cuestión y, en su caso, actuando de forma subsidiaria, también de forma inmediata, a costa de los propietarios que no hayan cumplido con el deber de conservación.

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN

Tomás Quintana López

NOTA IMPORTANTE: No será necesario que nos envíen su respuesta por correo postal si la registran al Procurador del Común (DIR3 I0000423, CIF Q9750006J) y tienen activados los avisos por correo electrónico (procurador@procuradordelcomun.es) o el envío de comunicaciones/notificaciones a la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), o bien si la registran directamente en nuestra sede electrónica (pccyl.sedelectronica.es). Les solicitamos, por otra parte, que no la envíen al representante (persona que haya presentado este escrito en su sede electrónica).